



RESUMEN EJECUTIVO

EL PROYECTO

España 2050 es un ejercicio de prospectiva estratégica que persigue un doble objetivo:

- mejorar nuestra comprensión de los desafíos y las oportunidades sociales, económicos y medioambientales que afrontará nuestro país en las próximas décadas; y
- generar, a partir de un diálogo multi-actor, una *Estrategia Nacional de Largo Plazo*, que nos permita fijar prioridades, coordinar esfuerzos, y garantizar la prosperidad y el bienestar de nuestra ciudadanía en el futuro.

El presente estudio es un primer paso en esta dirección. Para elaborarlo, hemos dividido los 27 Estados miembros de la UE en tres grupos de países en función de su nivel de desempeño (bajo, medio y alto) en una serie de indicadores económicos, sociales y medioambientales estándar. Después, hemos analizado cómo, en los últimos treinta años, España ha logrado pasar del grupo de desempeño bajo al medio en la mayoría de ellos y nos preguntamos qué tendríamos que hacer para converger con el grupo de desempeño alto (al que llamamos la “UE-8”) en los próximos treinta.

El resultado son unos *Fundamentos y propuestas* que recogen:

- un análisis diacrónico y prospectivo de nueve grandes desafíos que España deberá superar de aquí a 2050 si quiere consolidarse como uno de los países más avanzados de Europa;
- más de 200 propuestas para lograrlo; y
- un cuadro de 50 objetivos e indicadores cuantitativos para diseñar líneas de acción, tomar medidas concretas y monitorear el progreso en los próximos años.

Estos *Fundamentos y propuestas* han sido elaborados por la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de la Presidencia del Gobierno y un centenar de expertos y expertas de reconocido prestigio de generaciones, sensibilidad política y disciplinas diversas (economía, ciencias ambientales, demografía, sociología, historia, ciencia política y derecho, entre otras). Además, se ha contado con el apoyo de varios Ministerios, la AIREF, el Banco de España, y el *Joint Research Centre* de la Comisión Europea.

Pensar el futuro es una responsabilidad del Estado, no del Gobierno, ya que el horizonte temporal del ejercicio ha de abarcar, necesariamente, varias legislaturas. Por eso, el análisis se ha realizado desde una perspectiva apartidista que antepone el rigor metodológico y la evidencia empírica a cualquier posición política. Todo el estudio se sustenta sobre una amplia base empírica, medible y contrastable, integrada por más de 500 series de datos y unas 1.650 publicaciones científicas, en su mayoría artículos académicos revisados por pares e informes elaborados por instituciones europeas, organismos internacionales, *think tanks* y entidades del tercer sector de innegable solvencia técnica.

El estudio nace, pues, con vocación de país. No pretende avalar o refutar el programa de ningún partido político, aunque sí aspira a ayudarlos a todos, como también a las instituciones públicas, empresas, ONGs, sindicatos, universidades, fundaciones, asociaciones y demás entes de nuestra sociedad civil.

Lo presentamos no como un *fait accompli*, sino como una primera propuesta que tendrá que ser mejorada y completada en los próximos meses mediante un diálogo nacional en el que participarán los principales actores sociales de nuestro país.

Creemos que España tiene que mirar más al futuro y que tiene que hacerlo de una forma distinta de la que suele mirar el presente: con menos crispación, más rigor científico, y un mayor optimismo. Nuestra esperanza es que este ejercicio ayude a conseguirlo.

EL ANÁLISIS

El contenido de *España 2050* puede resumirse en tres grandes ideas:

- I. España ha mejorado mucho en las últimas cuatro décadas de democracia.
- II. España se enfrenta a desafíos severos, presentes y futuros.
- III. España puede superarlos y consolidarse como uno de los países más avanzados de Europa antes de mediados de siglo.

Pensamos que estas tres afirmaciones son empíricamente ciertas a la vez y que cualquier estrategia que diseñemos deberá tenerlas en cuenta.

I. España ha mejorado mucho en las últimas cuatro décadas de democracia

En los últimos cuarenta años, España ha experimentado una transformación profunda que, en muchos aspectos, resulta ejemplar y única a escala mundial. En solo cuatro décadas, el nuestro ha pasado de ser un país empobrecido y mal conectado con el resto del mundo, a ser un país próspero y abierto, dotado de un tejido productivo moderno y de un estado de bienestar amplio que nos han permitido alcanzar o incluso superar a la media de la UE-27 en multitud de indicadores.

En materia económica, los avances han sido más que notables. Entre 1978 y la actualidad, nuestra renta por habitante se ha duplicado, nuestra tasa de empleo ha aumentado en 15 puntos (lo que equivale a haber generado 8 millones de empleos netos), y nuestra red de infraestructuras ha mejorado hasta convertirse en una de las diez mejores del mundo. Al mismo tiempo, nuestras empresas han conseguido integrarse con éxito en el comercio y las redes de financiación internacional, haciendo que nuestra tasa de apertura comercial haya pasado del 27% del PIB a rebasar el 67% (esto es, más que países como Francia o Italia) y convirtiendo a España en un referente mundial en sectores como el turismo, la construcción, el transporte, las energías renovables, la agroalimentación, la banca o la moda.

La calidad de nuestro capital humano también ha experimentado una mejora inmensa. Entre 1978 y la actualidad, el número medio de años formativos de nuestra población se ha duplicado; el abandono escolar ha caído del 70% al 16%, y la proporción de personas con educación superior (universidad o FP superior) ha aumentado del 16% (entre los nacidos en la década de 1940) al 47% (entre los nacidos en la década de 1980). Gracias a ello, las competencias de nuestra

población han mejorado drásticamente, a un ritmo solo comparable al de Finlandia durante ese periodo, y han convergido prácticamente con la media de la UE-27.

Este progreso habría sido imposible sin el avance y la consolidación de nuestro estado de bienestar, cuya capacidad para proveer servicios públicos de calidad y apoyar a quienes más lo necesitan no ha parado de aumentar desde la Transición. Hoy, nuestro Estado reduce la desigualdad en un 37% (el doble que a principios de los setenta), nos provee de una cobertura sanitaria universal y de primer nivel, y asiste a más de un millón de personas con necesidades de dependencia. Esto ha permitido, entre otras cosas, que España haya podido conquistar una de las metas más excelsas a la que puede aspirar cualquier país: tener la tercera esperanza de vida más alta del mundo, solo superada por las de Suiza y Japón. Los *millennials* de nuestro país vivirán, de media, 36 años más que sus abuelos, y 18 años más que sus coetáneos de Marruecos. Lo harán, además, con una mejor salud.

En el frente institucional, los avances también han sido enormes. En 1980, el Museo de Arte Moderno de Nueva York se negó a devolver el Guernica de Picasso argumentando que en nuestro país aún no existían las libertades democráticas necesarias. Hoy, España figura en todos los índices como una de las democracias más plenas del mundo, con unos niveles de fiabilidad electoral, libertad y derechos sociales, y seguridad ciudadana superiores a los de países como Francia o EE. UU.

En materia de inclusión social, nuestro progreso ha sido igualmente notable. España ha logrado registrar una de las brechas de género (en empleo, salarios, educación, derechos y participación política) más bajas de la UE y convertirse en un lugar tolerante con las diferencias y la otredad. Según los últimos datos, el nuestro es uno de los diez mejores países del mundo para vivir y trabajar siendo mujer, y uno de los más respetuosos con la orientación sexual, la religión y la cultura de las personas.

España es, también, uno de los países más preocupados por la emergencia climática. En las dos últimas décadas, España ha disminuido la cantidad de residuos municipales que produce en un 27%, ha reducido la contaminación de sus ciudades, y ha aumentado su generación de electricidad a partir de fuentes renovables hasta alcanzar los 100.000 gigavatios hora, suficiente como para abastecer a más de la mitad de sus hogares. Gracias a ello, el último *Environmental Performance Index* de la Universidad de Yale nos sitúa como el 14º país más sostenible del planeta.

Todos estos datos ilustran algo que conviene no olvidar: España es un caso de éxito. Cuando contemplamos la realidad limitándonos al presente más inmediato, es fácil sucumbir al pesimismo y a la sensación de que “las cosas no mejoran” o que “van a peor”. Sin embargo, cuando se analiza la evidencia empírica y las tendencias del medio y largo plazo, se observa que nuestro país lleva una trayectoria positiva en la mayoría de frentes.

II. España se enfrenta a desafíos severos, presentes y futuros

Naturalmente, esto no significa que España no tenga problemas o que deba conformarse con los logros alcanzados. Es innegable que muchos de los cambios registrados entre 1978 y 2008 fueron insuficientes o inadecuados, y que, a menudo, se erigieron sobre cimientos de escayola que, con las crisis de 2008 y 2011, empezaron a colapsar. Hoy, nuestro país arrastra todavía carencias importantes y se enfrenta a desafíos notables que, si no son superados en las próximas décadas, seguirán limitando nuestra capacidad para crecer de forma sostenida y sostenible en el futuro, nos seguirán haciendo más vulnerables a las crisis, y nos impedirán converger

con los países más avanzados de Europa en aspectos clave para el desarrollo económico, la sostenibilidad medioambiental, y la equidad y el bienestar social. De entre esos muchos desafíos, aquí analizamos nueve, que consideramos serán especialmente relevantes para nuestro futuro.

El primer capítulo examina el desafío de la productividad y el patrón de crecimiento económico.

A pesar de los muchos avances registrados desde 1980, España sigue teniendo hoy un nivel de productividad considerablemente inferior al de sus vecinos europeos. Esto significa que somos capaces de generar menos riqueza y oportunidades que otros países de nuestro entorno, algo que está comprometiendo el desarrollo de todo el país y que explica los menores salarios, las jornadas laborales más largas, y la baja competitividad de muchas de nuestras empresas.

El envejecimiento demográfico que tendrá lugar en las próximas décadas podría agravar esta situación. Se estima que, de aquí a mediados de siglo, la población española de entre 16 y 64 años podría reducirse en 3,7 millones, situándose por debajo de los 27 millones (niveles de 1996), incluso si se logran mejoras en la tasa de natalidad y se integran a cientos de miles de inmigrantes cada año. En ausencia de mejoras de productividad, esta contracción de la fuerza laboral podría hacer que nuestra economía se estancase entre 2023 y 2050, con un crecimiento anual del PIB de entre el 0,3% y 1,1%; un crecimiento muy inferior al 2% que tuvimos entre 1996 y 2019, que nos alejaría todavía más de los países avanzados de Europa.

Para evitar este escenario negativo, España tendrá que hacer una apuesta decidida y contundente por la educación (desde el nacimiento hasta la senectud), multiplicar sus esfuerzos en I+D, acelerar la modernización del tejido productivo aprovechando las oportunidades de la digitalización y la transición ecológica, fomentar el crecimiento de sus pequeñas y medianas empresas, reducir al máximo las distorsiones generadas por las trabas administrativas, y atajar con éxito el problema de la economía sumergida.

El segundo capítulo examina el desafío de la educación de la población más joven. A pesar de que ha mejorado mucho, nuestro sistema educativo aún presenta un rendimiento menor que el de la mayoría de países de nuestro entorno. Esto se aprecia, entre otras cosas, en nuestras elevadas tasas de repetición y abandono escolar, y en nuestros resultados de aprendizaje, todavía inferiores a los de la media de la UE-27 y la OCDE. Sin reformas de calado, estas carencias seguirán lastrando la prosperidad del país y la vida de nuestra población. De aquí a 2050, 3,4 millones de estudiantes podrían repetir curso, 2,2 millones podrían abandonar prematuramente la escuela, y España podría verse superada en aprendizaje y calidad educativa por países como Portugal, Hungría o Letonia.

Para evitar este escenario, España deberá llevar a cabo reformas profundas en su sistema educativo, aprovechando las ventajas que ofrecerán tanto la digitalización como el cambio demográfico. Tendremos que transformar la carrera docente, modernizar el currículum, ampliar la autonomía de nuestros centros educativos, crear un sistema de evaluación eficaz, reforzar los mecanismos de apoyo a los colectivos más desfavorecidos, y potenciar la educación de 0 a 3 años. El objetivo debe ser conquistar la vanguardia educativa europea antes de mediados de siglo.

El tercer capítulo aborda el desafío de la formación y recualificación de la fuerza trabajadora. En las últimas cuatro décadas, España ha incrementado enormemente su proporción de habitantes con un título terciario (universidad o FP superior) hasta converger con los países de la UE-8. Sin embargo, sigue teniendo una proporción de personas sin formación “profesionalizante” (ESO o inferior) excesivamente elevada (el 48% de nuestra población activa), algo que está condicionando la productividad, el empleo, y el bienestar de todo el país. Además, nuestra población adulta

presenta un dominio de competencias básicas considerablemente inferior al de sus homólogos europeos. Tanto es así que, en España, las personas con titulación terciaria (Universidad y FP superior) tienen un nivel de comprensión lectora y de habilidad matemática más bajo que el de los graduados en Bachillerato de los Países Bajos.

En el futuro, a medida que la economía del conocimiento avance, la tecnología vaya transformando nuestro tejido productivo, la población activa disminuya, y la competencia global aumente, las carencias mencionadas se volverán más onerosas para el país, y el hecho de contar con una fuerza trabajadora bien formada y actualizada cobrará aún mayor trascendencia. Para no quedarse atrás en este escenario emergente, España tendrá que reducir la población que solo cuenta con la ESO (pasando del 40% actual al 15%), aumentar considerablemente la proporción de personas que obtienen un título de universidad o FP superior, y poner en marcha un sistema integral de recualificación que le permita actualizar las competencias de al menos un millón de trabajadores (empleados y desempleados) cada año. Solo así podremos cosechar las ganancias de productividad que necesitamos, implementar con éxito la transición ecológica, y garantizar la sostenibilidad de nuestro estado de bienestar en el largo plazo.

El cuarto capítulo explora el desafío climático y medioambiental. A lo largo del siglo XX, España, como la mayoría de los países desarrollados, adoptó un patrón de crecimiento económico basado en el uso abusivo y lineal (“extraer, producir, consumir y tirar”) de los recursos naturales. Este patrón ha causado una degradación medioambiental sin precedentes en nuestro territorio y ha precipitado una crisis climática que podría tener efectos catastróficos en el futuro cercano. La España de 2050 será más cálida, árida e imprevisible que la de hoy. Si no adoptamos medidas contundentes con celeridad, las sequías afectarán a un 70% más de nuestro territorio, los incendios y las inundaciones serán más frecuentes y destructivos, el nivel y la temperatura del mar aumentarán, sectores clave como la agricultura o el turismo sufrirán daños severos, 27 millones de personas vivirán en zonas con escasez de agua, y 20.000 morirán cada año por el aumento de las temperaturas.

Para evitar este escenario, tendremos que convertirnos en una economía circular y neutra en carbono antes de 2050, tomar medidas que nos permitan minimizar los impactos del cambio climático, y transformar el modo en el que nos relacionamos con la naturaleza. Esto implicará, entre otras cosas, cambiar radicalmente la forma en la que generamos energía, nos movemos, y producimos y consumimos bienes y servicios. Habrá que aprovechar toda nuestra riqueza en fuentes de energía renovable, electrificar el transporte, reinventar las cadenas de valor, replantear los usos que hacemos del agua, reducir al mínimo los residuos que generamos, apostar por la agricultura ecológica, e impulsar la fiscalidad verde. Esto deberá hacerse en un tiempo récord, sin reducir la competitividad de nuestra economía, y sin dejar a nadie atrás.

El quinto capítulo analiza el desafío de adaptar nuestro estado de bienestar a una sociedad más longeva. Durante las próximas tres décadas, la esperanza de vida de la población española seguirá aumentando (podría hacerlo en más de 3 años), lo que provocará un fuerte envejecimiento de nuestra pirámide demográfica. En 2050, uno de cada tres españoles tendrá 65 años o más, y por cada persona en esta franja de edad habrá solo 1,7 personas entre los 16 y los 64 años (hoy, hay 3,4). Ni las posibles mejoras en la tasa de natalidad ni un potencial incremento de la inmigración podrán revertir completamente este escenario. El envejecimiento demográfico traerá importantes oportunidades sociales y económicas al país, pero también un notable desafío para la sostenibilidad de nuestro estado de bienestar. De aquí a mediados de siglo, el gasto sanitario podría aumentar en más de 1 punto de PIB, el gasto público en pensiones podría incrementarse hasta en 5 puntos de PIB, y el número de personas mayores beneficiarias de

ayudas a la dependencia podría duplicarse, con el gasto público en cuidados pasando del 0,8% actual a más del 2,0% del PIB en 2050.

Para poder afrontar estos cambios, España deberá apostar por la tecnología, rediseñar parte de su Sistema Nacional de Salud, asegurar la sostenibilidad y suficiencia de su sistema público de pensiones, y lograr que las personas en edades avanzadas tengan una participación cada vez más activa y satisfactoria en la vida económica y social del país. La forma en que concebimos la vejez y la división entre el trabajo y la jubilación también tendrá que cambiar, algo que no solo beneficiará al Estado sino también al conjunto de la ciudadanía.

Igual de importante será el saber articular un desarrollo territorial equilibrado, justo y sostenible; desafío que se aborda en el capítulo sexto. Se estima que, en 2050, el 88% de nuestra población vivirá en ciudades y que la España rural perderá casi a la mitad de sus habitantes actuales. Si no tomamos medidas, las grandes urbes y sus áreas metropolitanas se volverán más extensas y menos sostenibles, y problemas como el acceso a la vivienda o la segregación social se agravarán, sobre todo en ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia. Por el contrario, muchos municipios rurales y ciudades medias y pequeñas perderán dinamismo económico y sufrirán un agudo declive social y patrimonial.

Para mitigar estos procesos, tendremos que recuperar el modelo de ciudad compacta y de proximidad propio de la cultura mediterránea, impulsar la creación de vivienda pública y social, fomentar la rehabilitación de edificios, y transformar el modelo de movilidad en favor del transporte público o compartido y la peatonalización del espacio urbano. Al mismo tiempo, tendremos que revitalizar la España rural y las ciudades medias a través de una apuesta decidida por la integración tecnológica, el transporte público, el teletrabajo, y la diversificación económica aprovechando la transición ecológica, la digitalización o el desarrollo de la *silver economy* (aquella asociada a las necesidades de las personas mayores de 50 años).

El capítulo séptimo examina las deficiencias de nuestro mercado de trabajo y su potencial evolución futura. España sigue registrando unos niveles de desempleo y precariedad laboral desproporcionadamente altos que están partiendo nuestra sociedad en dos y condicionando la prosperidad de todo el país. Este problema podría verse agravado en las próximas décadas por efecto de las transformaciones demográficas y tecnológicas que irán produciéndose. Por un lado, si no aumentamos la inserción laboral de nuestra población, el envejecimiento podría provocar una caída de los ocupados a un ritmo del -0,5% anual de aquí al 2050, frente al incremento del 2,0% que tuvimos entre 1995 y 2019. Para evitar este escenario, habrá que elevar la tasa de empleo de las mujeres, los jóvenes y las personas mayores de 55 años; incentivar la inmigración legal; y potenciar la recuperación y atracción de talento. Por otro lado, la generalización de las tecnologías digitales dará lugar a una fuerte modernización de nuestro tejido productivo que, en el corto plazo, podría derivar en pérdidas de puestos de trabajo y un empeoramiento de las condiciones laborales de determinados colectivos. Para neutralizar este riesgo, habrá que llevar a cabo una fuerte ampliación de las políticas activas de empleo, adecuar el marco normativo, y adaptar las redes de protección social para que protejan a las personas y no a los puestos de trabajo.

Estas medidas también serán esenciales para afrontar otro de los grandes desafíos que tiene nuestro país: reducir sus niveles de pobreza y de desigualdad. A él le dedicamos el capítulo octavo. Aunque España ha mejorado mucho en materia de redistribución y protección social, sigue siendo hoy lo que ya era hace tres décadas: el tercer país con mayor desigualdad de renta de la UE y el cuarto con mayor población en riesgo de pobreza. En materia de riqueza, la situación es algo más favorable, registrándose en nuestro país un nivel de desigualdad similar al de la media

de la UE. No obstante, desde hace algunos años se observa una tendencia preocupante hacia la concentración de la riqueza, con diferencias especialmente abruptas en el plano intergeneracional. En lo que va de siglo, la diferencia en riqueza que existe entre las personas de 65 años y las de 35 se ha duplicado, y se asemeja ya a la que existe en EE. UU.

Sin mejoras de productividad y empleo, y cambios en el sistema educativo, la desigualdad seguirá aumentando en el futuro, agravada por tendencias como el envejecimiento demográfico o la transformación tecnológica. Para evitarlo, nuestro país deberá, entre otras cosas, cambiar su patrón de crecimiento, reactivar su ascensor social, abordar el problema de la vivienda, y acometer una reforma fiscal paulatina pero profunda que dote de mayor capacidad recaudatoria y progresividad al sistema y permita reforzar las redes de protección social.

En última instancia, todas las reformas recogidas deberán servir para cumplir un objetivo: incrementar el bienestar de toda nuestra ciudadanía hasta hacer de España uno de los países más “felices” del mundo. Esta es, al fin y al cabo, la razón de ser de las políticas públicas y del progreso científico, económico y social. **Cómo lograr que ese progreso se convierta en mayor bienestar es examinado en el capítulo noveno.**

III. España puede superar estos desafíos y consolidarse como uno de los países más avanzados de Europa antes de mediados de siglo

Superar estos desafíos no será fácil, pero es perfectamente posible. Los análisis de trayectorias y los ejercicios de política comparada recogidos en este estudio indican que, si se lo propone, España podrá capear las dificultades que traerán las tendencias futuras, aprovechar sus oportunidades y converger así con los países de la UE-8 de aquí a 2050. De hecho, para conseguirlo, en muchos casos tendrá que implementar reformas y mejoras similares en dificultad y magnitud a las ya implementadas en las últimas cuatro décadas. Si lo hicimos en el pasado, podemos hacerlo de nuevo, ayudados por las transformaciones socioeconómicas que ha acelerado la pandemia y los ambiciosos fondos y planes de recuperación que ha articulado la Unión Europea.

Piénsese, por ejemplo, en **el desafío económico**. Para equipararse con los países de la UE-8 y recortar la brecha de renta per cápita que mantiene con ellos, España tendrá que incrementar su productividad en un 50% de aquí a mediados de siglo al tiempo que aumenta sus tasas de empleo. Puede parecer mucho, pero lo cierto es que varios países europeos (incluido el nuestro) ya lograron un progreso similar en el pasado reciente. El hecho de que España parta de unos niveles de productividad y empleo más bajos, y que existan tendencias favorables en marcha como la digitalización y el desarrollo de la Inteligencia Artificial, la equiparación educativa y laboral de la mujer, el aumento de la formación, o la transición ecológica, aumentan nuestras probabilidades de conseguirlo.

El mismo posibilismo debería impregnar nuestra aproximación a **los desafíos de capital humano**. Para equipararse a la UE-8, España deberá hacer dos cosas: mejorar sus niveles de aprendizaje (por ejemplo, con un aumento de 20 puntos en las pruebas estandarizadas de PISA) y aumentar la proporción de población entre 25 y 34 años que obtiene una educación superior a la ESO en 23 puntos porcentuales. ¿Puede hacerse? Pensamos que sí. Por dos motivos. Primero, porque nuestro país ya cosechó unos avances en aprendizaje y cobertura similares en el pasado reciente. Segundo, porque las transformaciones demográficas y tecnológicas que ya se están produciendo servirán de viento de cola para lograrlo. De aquí a 2050, España tendrá casi un millón de estudiantes menos de entre 3 y 24 años. Esto permitirá a nuestro país duplicar su

gasto por alumno hasta equiparlo con el que ya tiene, por ejemplo, Dinamarca sin incurrir en un incremento significativo de su gasto público. Esta inyección de recursos, unida a la generalización de tecnologías como el *big data*, nos ayudará a combatir con mayor eficacia fenómenos como el abandono o la segregación escolar, descubrir y aprovechar mejor el potencial de la población joven, y cosechar las ganancias de cobertura y aprendizaje que necesitamos para situarnos en la vanguardia europea de la educación.

En lo que se refiere a la **formación de la población trabajadora**, lo cierto es que nuestro país ya cuenta con las instituciones, las infraestructuras y los recursos humanos necesarios para articular ese sistema integral de recualificación que necesita, y que lo que hace falta ahora es acometer una serie de cambios normativos y culturales paulatinos que, en cierto modo, ya están en marcha. Si España supo crear casi 2 millones de plazas formativas en FP superior y universidad entre 1980 y 2020, bien podrá crear un millón de puestos para programas formativos mucho más breves de aquí a 2050, sobre todo si se vale de las tecnologías digitales y los formatos híbridos de enseñanza.

En **materia medioambiental**, los desafíos que tendremos que superar en el futuro son especialmente notables. Para frenar el cambio climático y evitar sus efectos más nocivos, nuestro país, como el resto del mundo, tendrá que llevar a cabo transformaciones profundas que le permitan convertirse en una sociedad neutra en carbono y eficiente en el uso de recursos, con patrones de consumo y producción sostenibles y responsables. Al mismo tiempo, deberá aumentar su resiliencia frente al cambio climático, adaptándose a los riesgos emergentes y transformando la manera en la que nos relacionamos con el entorno natural. Hacerlo no será fácil y la trayectoria que llevamos hasta la fecha alerta sobre la necesidad de adoptar medidas contundentes e inmediatas en los próximos años. En todo caso, los cambios que se han producido desde principios de siglo (en materia de reciclaje, eficiencia en el uso de materiales, agua y energía, o expansión de cultivos ecológicos) y la pléyade de iniciativas legislativas, económicas y tecnológicas que ya están en marcha, invitan al optimismo. Tanto es así, que la mayoría de los expertos coinciden en que España tendrá un papel destacado en la transición ecológica a escala europea.

También debemos ser optimistas respecto a **los desafíos que plantea el aumento de la longevidad**. La clave está en entender que lo que determina el gasto de una persona para el Estado no es solo el número de años que vive, sino también el grado de salud del que goza hasta el momento de su muerte, y el nivel de actividad laboral y social que esta persona tiene hasta entonces. La vejez del futuro no será la vejez del pasado. Comenzará mucho más tarde, será más dinámica, y no estará tan asociada a fenómenos como la inactividad o la dependencia. Eso significa que, si hacemos los cambios institucionales y culturales necesarios, en las próximas décadas, la tasa de empleo de los españoles y españolas en edades avanzadas podría aumentar considerablemente y por voluntad propia. Esto, unido a una serie de reformas en nuestro sistema sanitario y al aumento en los ingresos públicos que se logrará por las vías descritas en esta *Estrategia*, podría hacer que, hacia 2050, el gasto público de España en pensiones, salud y servicios de cuidado se incremente, pero manteniéndose en un nivel asumible, no superior al 25% del PIB, que es parecido al que ya tienen hoy países como Austria o Francia.

Otro de los grandes desafíos que deberá afrontar nuestro país es el de **garantizar la habitabilidad, cohesión social y sostenibilidad medioambiental de sus ciudades al tiempo que mitiga la despoblación rural y asegura el equilibrio territorial**. De aquí a 2050, la proporción de población española viviendo en ciudades aumentará en más de 8 puntos porcentuales, algo que sin duda podría aportar presión adicional a retos actuales como el del acceso a la vivienda, la segregación social o la sostenibilidad ambiental. Sin embargo, no hay que perder de vista que, en las últimas

cuatro décadas, España ya registró un aumento de la urbanización similar y que, aun así, logró que sus niveles de calidad residencial, acceso a la vivienda, seguridad ciudadana, o contaminación ambiental, mejorasen o se mantuviesen estables en cotas asimilables a los de la media europea. Si nuestro país supo gestionar con relativo éxito el proceso de urbanización en el pasado, debería poder seguir haciéndolo en un futuro ayudado por las nuevas tecnologías, fenómenos como el teletrabajo o la movilidad compartida, el aumento de la vivienda social, la generalización de fórmulas alternativas de tenencia de vivienda, y un conocimiento del urbanismo y las dinámicas socioeconómicas y territoriales mucho más sofisticado e integral del que existía entonces.

En ciertos casos, el despoblamiento de la España rural no podrá detenerse. Pero esto no significa que todos los pueblos vayan a vaciarse o que las oportunidades y la calidad de vida de las personas que vivan en ellos vayan a reducirse. Avances como el 5G, el Internet por satélite, o la robótica nos permitirán llevar empleo (teletrabajo) y servicios (sanitarios, educativos y de transporte) a lugares a los que hasta ahora no llegaban; la *silver economy*, el turismo y la agricultura ecológica dinamizarán la actividad económica y social en muchos pueblos; y la transición energética proporcionará energía limpia y nuevas oportunidades laborales incluso a los puntos más remotos de nuestra geografía. En 2050, menos gente vivirá en la España rural, pero quienes lo hagan, podrán vivir mejor que ahora.

La adaptación de nuestro mercado laboral a las nuevas realidades sociales, económicas y tecnológicas también debe abordarse desde una óptica posibilista. El cambio demográfico reducirá sustancialmente nuestra fuerza laboral, pero si logramos recortar la tasa de paro y elevar la tasa de empleo hasta los niveles actuales de los países más avanzados de Europa (esto es, 15 puntos de aumento hasta el 80%), conseguiremos neutralizar en buena medida los efectos negativos del envejecimiento. De perder 2,5 millones de ocupados potenciales, pasaremos a crear 1,5 millones de aquí a 2050. Lo mismo ocurrirá con la transformación tecnológica. La historia enseña que la tecnología siempre acaba creando más empleos de los que destruye. Si somos capaces de aprovechar todas sus ventajas, generaremos nuevos empleos, aumentaremos la productividad y mejoraremos las condiciones laborales de la mayoría de la población trabajadora.

Otra de nuestras aspiraciones debe ser la de reducir la desigualdad y nuestras tasas de pobreza. Si logramos sentar las bases de un crecimiento económico regido por las ganancias de productividad y la generación de empleo estable y de calidad, seremos capaces de mejorar la capacidad adquisitiva del conjunto de la población, reduciremos mucho los efectos de las crisis económicas sobre la desigualdad y la pobreza, y generaremos los ingresos públicos suficientes para elevar el gasto social. Si, además, mejoramos la calidad de nuestro capital humano en los niveles que recoge este estudio, conseguiremos reactivar el ascensor social y brindaremos más y mejores oportunidades económicas y laborales a nuestra población. Reducir la desigualdad a los niveles de los países más avanzados de Europa y recortar a la mitad nuestra tasa de pobreza de aquí a 2050 es totalmente factible.

El mismo enfoque posibilista puede y debería aplicarse al resto de desafíos que puedan surgir en el futuro. España arrastra carencias severas y se topará con obstáculos muy notables de aquí a 2050. Aun así, lo cierto es que, desde que existe como país, España no ha hecho más que progresar y que no hay razones para pensar que tenga que dejar de hacerlo ahora. **El futuro es más prometedor de lo que a menudo creemos.**

LAS PROPUESTAS

Naturalmente, el progreso no se dará por sí solo. Para seguir mejorando y llegar a converger con los países más avanzados de Europa, las generaciones que hoy vivimos en España tendremos que llevar a cabo reformas profundas y poner en marcha iniciativas audaces y sostenidas en el tiempo.

Este estudio sugiere más de 200 que, en un esfuerzo de síntesis, podrían agruparse en doce ejes:

- Apuesta decidida por la mejora de la formación de nuestra población, desde el nacimiento y a lo largo de toda la vida.
- Apoyo contundente y ambicioso a la innovación en todos los frentes, no solo en el científico-tecnológico.
- Fuerte modernización de nuestro tejido productivo y nuestra cultura empresarial.
- Transición hacia un modelo de desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente.
- Ampliación drástica de las oportunidades de la población joven, especialmente en ámbitos como la educación, el empleo y el acceso a la vivienda.
- Consecución de la plena igualdad de género.
- Fomento de la inmigración legal y de la captación de talento extranjero como vías adicionales para dinamizar nuestra economía y apuntalar la viabilidad de nuestro estado de bienestar.
- Fortalecimiento de los servicios públicos, con especial foco en la educación, la salud y los cuidados.
- Rediseño de las prestaciones sociales para transitar progresivamente a un modelo que proteja a la ciudadanía en función de sus necesidades y no solo de su historial laboral.
- Reforma de nuestro sistema fiscal para aumentar su capacidad recaudatoria y su progresividad, y poder financiar así el fortalecimiento de nuestro estado de bienestar sin comprometer la sostenibilidad de las cuentas públicas.
- Modernización de la Administración pública para generar ganancias de eficiencia, y rediseño profundo de las políticas públicas basado en una mayor atención a la evidencia empírica, la experimentación, la evaluación (*ex ante* y *ex post*), la colaboración social, y las pérdidas y ganancias (*trade offs*) involucradas en cada medida.
- Compromiso transversal con los derechos e intereses de las generaciones futuras. Las decisiones que tomemos hoy no pueden acabar reduciendo el bienestar de nuestros hijos.

Resulta difícil alcanzar aquello que no puede medirse. Por ese motivo, hemos creado un cuadro de seguimiento que recoge 50 objetivos concretos que España debería alcanzar de aquí a 2050 si realmente quiere converger con los países más avanzados de Europa. A la hora de diseñarlos y seleccionarlos, hemos tratado de observar estas tres condiciones:

- Que los objetivos sean cuantificables; es decir, que puedan medirse con indicadores específicos que se alimenten de datos accesibles, de cobertura europea, publicación recurrente y validez reconocida por la comunidad académica.
- Que los objetivos sean ambiciosos pero realistas. Las sendas de convergencia han sido diseñadas mediante un cuidadoso análisis que tiene en cuenta trayectorias pasadas, la proyección de tendencias futuras, docenas de casos de política comparada y la interdependencia entre unos y otros objetivos.
- Que los objetivos e indicadores sean actualizables y puedan ir modificándose o reemplazándose por otros a medida que vaya cambiando la realidad que postulan, de modo que no queden obsoletos antes de 2050.

SOLO EL PRIMER PASO

Conviene recalcar, en todo caso, que estos objetivos y medidas son solo una propuesta; un primer borrador inicial que tendrá que ser completado a lo largo de los próximos meses mediante un diálogo nacional en el que participen los principales actores sociales de nuestro país, y que habrá de ser revisado cada pocos años en respuesta a las nuevas realidades sociales, económicas, medioambientales y tecnológicas que vayan surgiendo. Dicho de otro modo: este estudio no pretende ser una hoja de ruta rígida para el cambio, sino una invitación al cambio. Una llamada a la reflexión, al diálogo y a la acción colectiva.

Los seres humanos no podemos predecir el futuro, pero sí podemos soñarlo, planearlo y hacerlo realidad. Seamos optimistas. Recuperemos la confianza en el progreso, en nuestro país y en nosotros mismos. El bienestar de las generaciones presentes y futuras depende de ello.